

## Justificante de firma de documento

Fecha de generación: 31/10/2016 13:43

Nombre del documento: Resolucion\_8959 Coste cargos políticos

### Relación de firmantes

Datos del firmante	Grafo de firma manual	Fecha de firma	Información de firma
ANGELINA TRIGO PORTELA		31/10/2016 13:40	Firma

Este documento es un justificante de firma que permite recuperar el archivo de firma digital original (el único con validez legal) introduciendo el código CSV ubicado en el margen izquierdo en la siguiente dirección: <https://sedempr.gob.es/es/sede/csv>



Con fecha 29 de septiembre de 2016 tuvo entrada en la Unidad de Información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO solicitud que quedó registrada con el número 001-008959:

“Al amparo de la Ley 19/2013 me gustaría conocer el coste total de las personas que ocupan cargos políticos en cada uno de los ministerios. Muchas gracias”.

Con fecha de 30 de septiembre esta solicitud se remitió al Ministerio de Presidencia y con fecha 26 de octubre de 2016 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, esta Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración **resuelve conceder el acceso a la información** a que se refiere la solicitud deducida por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO indicándole, en los términos establecidos en el artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que la información solicitada se encuentra publicada en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España.

Señala el artículo 1.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que el Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (art. 11 ley 50/1997, de 27 de noviembre).

Señala el artículo 12 de la misma ley, en los números 1 y 2, que el nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los términos previstos en la Constitución y que los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Por su parte, el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público señala que: en la organización central son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado y órganos directivos: los

Subsecretarios y Secretarios Generales; los Secretarios Generales técnicos y Directores Generales.

El artículo 7.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dispone que los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno y el 15.1 que son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, exige, para la elección de la mayoría de los cargos directivos de la Administración Central su condición de funcionario, con las excepciones que se señalan a continuación.

El artículo 63 dispone que los nombramientos de Subsecretarios habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

El artículo 64 dispone para los Secretarios Generales, que los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

El artículo 65 establece que los nombramientos de los Secretarios Generales Técnicos se efectúen entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Para los Directores Generales se establece también en el artículo 66 que los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.

En virtud de todo lo expuesto y considerando que su pregunta se refiere a cargos políticos, le indico que el Portal de la Transparencia del Gobierno de España tiene publicadas las retribuciones percibidas por los Ministros y Secretarios de Estado de cada Ministerio correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.

Para localizarlos puede acceder al siguiente enlace:

[http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia\\_Home/index/categorias/Institucional/Retribuciones-de-altos-cargos.html#](http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Institucional/Retribuciones-de-altos-cargos.html#)

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.